

SÍNTESIS

DESIGUALES

ORÍGENES, CAMBIOS Y
DESAFÍOS DE LA BRECHA
SOCIAL EN CHILE



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Síntesis **DESIGUALES**

Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile

www.desiguales.org

© Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), junio 2017

www.cl.undp.org

ISBN: 978-956-7469-87-1

Edición de textos: Andrea Palet, Pilar de Aguirre

Diseño y Diagramación: TILT Diseño

Difusión: Acento en la Ce

Impreso en Santiago de Chile en los talleres de Ograma Impresores.

Los contenidos de este documento pueden ser reproducidos en cualquier medio, citando la fuente.

El presente documento es una síntesis del libro DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile (PNUD, 2017)

En este documento, siempre que es posible, se intenta usar un lenguaje no discriminador ni sexista. Conscientes de que existe debate al respecto, consideramos sin embargo que las soluciones que hasta ahora se han intentado en nuestro idioma no son sistemáticas y obstaculizan la lectura. Por lo tanto, en los casos en que sea pertinente, se usará el masculino genérico, que la gramática española entiende que representa a hombres y mujeres en igual medida.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Representante Residente

Silvia Rucks

Investigadores principales

Matías Cociña

Raimundo Frei

Oswaldo Larrañaga

Investigadores

Denise Falck

Rodrigo Herrera

Vicente Silva

Consultoras

Kathya Araujo

Macarena Orchard

Alejandra Rasse

PRESENTACIÓN

A nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, tengo el agrado de presentar *DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*.

Desde el retorno a la democracia hace casi tres décadas, Chile ha logrado grandes avances en los planos institucional, económico y social, que le han permitido alcanzar mejoras notables en los niveles de bienestar de su población. En la actualidad el país es clasificado como uno de ingresos medios altos, exhibe una tasa de pobreza muy por debajo del promedio de América Latina y ocupa el primer lugar en la región en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora anualmente el PNUD.

Los buenos indicadores socioeconómicos esconden sin embargo una realidad menos auspiciosa: en Chile los frutos y las oportunidades del progreso no alcanzan a todos por igual. En efecto, cuando el IDH se ajusta por la desigualdad, Chile retrocede doce puestos en el ranking mundial. Tal como se muestra a lo largo de este libro, la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de las regiones retrasadas, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías.

La desigualdad perjudica al desarrollo, dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social. Reducirla no es solo un imperativo ético, es también una exigencia para la sostenibilidad del desarrollo de los países. La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las Naciones Unidas. Esto implica el compromiso de lograr un crecimiento económico

inclusivo y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, de modo de cumplir con el mandato de “no dejar a nadie atrás”.

Abordar el desafío de reducir las desigualdades y la exclusión requiere, en primer lugar, entender sus causas, sus raíces históricas, sus formas de reproducción y sus consecuencias sobre la vida de las personas. Con esta publicación, el PNUD reitera su compromiso con la generación y difusión de conocimiento que sirva como base de discusiones informadas para la construcción de consensos respecto de los cambios que el país requiere. Aspiramos a que todos los ciudadanos, especialmente aquellos en los grupos menos aventajados, tengan mayor control sobre sus propias vidas para perseguir los objetivos que ellos mismos consideren valiosos, integrándose de manera efectiva y participativa al proceso de desarrollo humano inclusivo y sostenible.

Silvia Rucks
Representante Residente del PNUD
Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile

ESTRUCTURA DEL LIBRO

Síntesis

Introducción

CHILE, PAÍS DESIGUAL

Capítulo 1 Definiciones y razones

Capítulo 2 La desigualdad socioeconómica en Chile

LA PESADA HERENCIA

Capítulo 3 La desigualdad en la historia de Chile

LA DESIGUALDAD VIVIDA

Capítulo 4 ¿Cómo es vivir en una sociedad desigual?

Capítulo 5 Desigualdad, dignidad y trato entre las personas

Capítulo 6 Entre la molestia y la tolerancia

ESTRUCTURA Y REPRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

Capítulo 7 Desigualdad en el trabajo

Capítulo 8 Educación y distribución de oportunidades

Capítulo 9 Redistribución de ingresos y seguridad social

CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA Y DE PODER

Capítulo 10 Concentración de los ingresos en Chile

Capítulo 11 Desigualdades e influencia política

Referencias

SÍNTESIS

Las desigualdades sociales están hoy en el centro de la discusión mundial. Numerosos informes, libros e investigaciones ponen el foco en ella, suscitando debates de variada intensidad sobre sus causas, manifestaciones y consecuencias.

En Chile, decir que el país es desigual es una obviedad. La desigualdad es parte de su fisonomía histórica, un rasgo estructural del orden social desde sus inicios hasta nuestros días. Para los habitantes es un elemento esencial de cómo entienden el país donde viven y la posición que ocupan en la sociedad.

La tasa de pobreza se ha reducido de manera notoria, los ingresos de los hogares han aumentado de forma considerable, la matrícula escolar y universitaria se ha expandido significativamente y el sistema democrático se ha mostrado estable. Pese a ello, la desigualdad sigue siendo una pesada herencia de la cual Chile no parece poder desprenderse con facilidad. La persistencia de enormes diferencias socioeconómicas, que se reflejan en espacios urbanos segregados, tratos discriminatorios y capacidades muy distintas de influencia y poder, son una mancha en un listado de logros de los cuales el país puede sentirse, con justa razón, orgulloso.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde hace ya dos décadas ha venido mostrando los avances y los obstáculos que el país ha experimentado, y junto con otros actores civiles, religiosos y políticos ha puesto el acento en las porfiadas diferencias sociales en Chile. El presente volumen ofrece una base sólida, profusamente documentada y actualizada para discutir este fenómeno que ha marcado la historia del país. La investigación que este libro registra, y que se extendió durante dos años, se funda en el convencimiento de que la desigualdad tiene consecuencias negativas para las sociedades, que abarcan tanto su desempeño económico como la calidad de las interacciones sociales y la legitimidad del sistema político.

Sin embargo, este trabajo no pretende hacerse eco de la contingencia social y económica, sino ofrecer una mirada de mayor alcance que destaque elementos de la desigualdad en Chile que anteceden y muy probablemente sobrevivan al momento actual. Tampoco se busca prescribir un nivel ideal de desigualdad socioeconómica, ni se dan recetas respecto de las acciones que el país debe acometer para hacerse cargo del fenómeno. Sí se indica una dirección clara: el escenario actual no es deseable y el conjunto de la sociedad deberá avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y un país con mayor igualdad social.

Basados en los mejores datos disponibles, y en evidencia cuantitativa y cualitativa generada especialmente para este trabajo, se responden las siguientes preguntas: ¿cuán desigual es Chile en términos socioeconómicos?, ¿es cierto que la desigualdad siempre ha estado presente en el país?, ¿cómo es vivir en un país muy desigual, cómo afecta la vida diaria de los ciudadanos?, ¿qué explica la reproducción de la desigualdad en el tiempo, y qué elementos permiten entender sus cambios?

Desigualdades socioeconómicas: más allá de las diferencias de ingresos

A lo largo de la historia han surgido y se han reproducido desigualdades de variado tipo: por ejemplo entre indígenas y españoles, hombres y mujeres, ricos y pobres, capitalinos y personas de otras regiones. Reconociendo la importancia del análisis de cada una de ellas, este trabajo se ocupa específicamente de las desigualdades que tienen su origen en las diferencias socioeconómicas, esto es, de los recursos de que disponen las personas en forma de ingresos, riqueza, empleos, educación, salud, vivienda y otros.

Dicho foco no se reduce, sin embargo, al estudio de las diferencias de ingresos o al dato de que algunos poseen más o menos recursos que otros. El concepto de desigualdad que se propone es más específico: *desigualdades sociales se definen aquí como las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas.*

Tomando esta definición, se exploran las múltiples dimensiones de la organización social que en Chile producen sistemáticamente ventajas para algunos y desventajas para otros. Para ello se usan distintos indicadores para clasificar a la población en clases o estratos sociales: años de educación, niveles de ingresos y pertenencia a clases ocupacionales.

Avances del país durante las últimas décadas

Antes de abordar de lleno el tema de la desigualdad en el país es necesario dar una breve mirada a los avances de los últimos años. Para cualquier observador informado, es innegable el enorme desarrollo que Chile ha logrado impulsar en las últimas décadas. De la mano de un crecimiento económico relativamente acelerado y siempre positivo, ha mejorado su infraestructura, ha ampliado notoriamente su cobertura educacional, ha profundizado la oferta de servicios sociales, ha profesionalizado la labor estatal, y, muy centralmente, ha incrementado el ingreso de las familias y ampliado su acceso a bienes, signos evidentes de una transformación de las condiciones de vida. A todo ello hay que sumar una notoria reducción de la pobreza. Esto es cierto tanto en términos absolutos como en comparación con el resto de los países de América Latina.

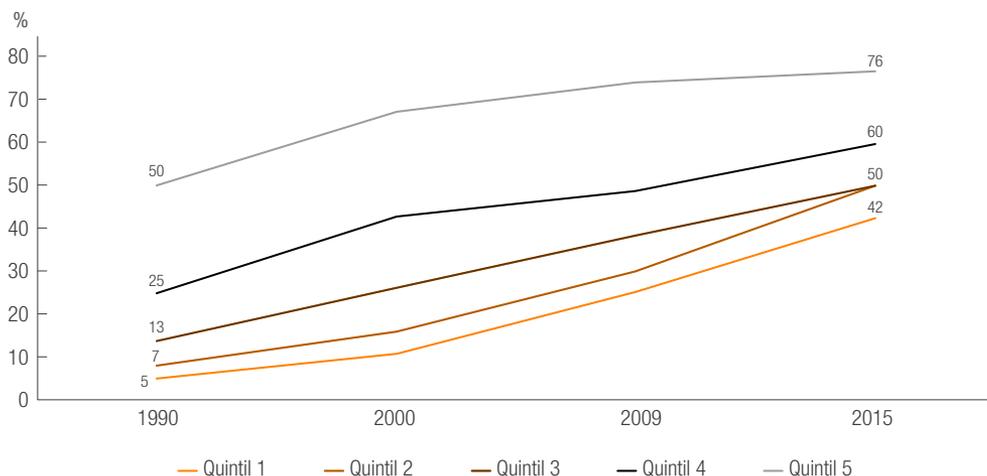
Para muchas personas en Chile, el mundo en que vivieron sus padres o incluso el mundo en el que ellas crecieron era muy distinto del que habitan hoy, no solo en una dimensión material sino también en lo que respecta al modo como los individuos y los grupos experimentan su propia posición social en el tiempo. Para muchos chilenos y chilenas, los progresos de las últimas décadas han significado salir de la miseria —la de la propia infancia, la de los padres o abuelos— y alcanzar un nivel de vida que, aunque muy a menudo inestable y plagado de riesgos, se percibe indudablemente menos precario. Al comparar su posición económica actual con la situación de sus hogares en el pasado, el 46% de la población consultada por la encuesta PNUD-DES percibe alguna forma de progreso socioeconómico. Incluso, del 25% de personas que evalúa su trayectoria de los últimos quince años como descendente, socialmente hablando, dos tercios cree que sus hijos lograrán tener una mejor posición que la suya.

Esta evaluación de las propias trayectorias tiene sustento: cuando las personas comparan su posición actual con las generaciones de sus padres, madres y abuelos, dan cuenta de una mejora palpable en las condiciones de vida, que tiene como telón de fondo el progreso económico del país. Usando la medida de pobreza introducida por el Ministerio de Desarrollo Social en 2013, y aplicándola a los datos históricos, se tiene que desde 1990 a la fecha el porcentaje de personas viviendo en la pobreza se ha reducido de un 68% a un 11,7%. Solo en los últimos quince años, el ingreso per cápita real de los hogares en el 10% más pobre de la población creció en un 145% real. Esto es, un hogar que el año 2000 tenía ingresos por \$200.000 hoy percibe \$490.000 (ambos cifras en pesos de 2015). Si bien el nivel absoluto de ingresos es aún bajo para una gran mayoría, el cambio relativo respecto del propio pasado es indudablemente muy significativo.

El optimismo sobre el futuro de los hijos tampoco debiese extrañar, pues responde a los enormes cambios en la estructura educacional del país entre 1990 y 2015, período en que el número de estudiantes en instituciones de educación superior prácticamente se quintuplicó, hasta alcanzar 1.150.000 estudiantes. Tomando los datos de la Encuesta de Caracterización

Socioeconómica Nacional (Casen), se observa que en los últimos quince años el aumento se concentró en jóvenes de los estratos medios y bajos: en el quintil inferior de ingresos aumentó más de ocho veces, de 4,7% a 42,3%, y en los quintiles 2 y 3 se multiplicó entre 4 y 7 veces.

Acceso a la educación superior por quintil de ingreso familiar, 1990 a 2015



Elaboración propia a partir de datos de las encuestas Casen de los años respectivos.

Chile ha avanzado, además, en sus rendimientos educativos. En la medición de competencias lectoras de la prueba PISA al año 2001, solo el 48,2% de los estudiantes de segundo medio cumplía con el mínimo. En la última medición, de 2012, el 68% de estudiantes lo hacía. Según esta métrica Chile obtiene el segundo lugar en América Latina después de Costa Rica, y se ubica a considerable distancia de varios países de la región. No obstante, ocupa el penúltimo lugar entre los países de la OCDE, donde el porcentaje de estudiantes con capacidades lectoras mínimas excede el 80% en casi todos ellos, y en varios es cercano al 90%. En suma, si bien Chile ocupa una buena posición en la región, se encuentra aún muy a la zaga del grupo de países a los que podría emular.

La evidencia mixta sobre las tendencias de la desigualdad de ingresos

Desde inicios de este siglo la desigualdad de ingresos medida por la encuesta Casen se ha reducido en el país. Esta tendencia a la baja no es exclusiva de Chile: durante la década de 2000 casi todos los países de América Latina redujeron sus brechas de ingreso, aunque partiendo de niveles de desigualdad muy altos.

Desigualdad de ingresos 1990 a 2015

	Gini	Palma D10/(D4-D1)	Razón quintiles Q5/Q1	% pobreza de ingresos	% salario mujer/ hombre
1990	52,1	3,58	14,8	68,0	76,9
1996	52,2	3,61	15,2	42,1	80,9
2000	54,9	4,17	17,5	36,0	84,8
2003	52,8	3,72	15,3	35,4	84,6
2006	50,4	3,25	13,3	29,1	88,0
2009	50,0	3,16	12,8	25,3	84,3
2011	49,1	3,01	12,2	22,4	86,4
2013	48,8	2,96	11,6	14,4	84,6
2015	47,6	2,78	10,8	11,7	84,4

Elaboración propia a partir de encuesta Casen, años respectivos.

Los ingresos corresponden a ingreso disponible per cápita del hogar, no ajustados a cuentas nacionales. La unidad de medición es el hogar ponderado por el número de miembros. La pobreza se mide con la medida introducida por el Ministerio de Desarrollo Social en 2013. El salario en la última columna corresponde a trabajadores dependientes entre 25 y 40 años, con 30 o más horas de trabajo semanales.

En Chile y en los demás países de ingreso medio de la región, las causas inmediatas de la reducción de la desigualdad de ingresos fueron la reducción de la brecha de salarios entre los trabajadores de mayor y menor calificación (en Chile la oferta de trabajadores más calificados explica la mitad de esta reducción durante los últimos doce años) y las transferencias gubernamentales a los grupos pobres y vulnerables. Sin embargo, no hay garantías de que estos factores sigan primando en el futuro. En particular, nada asegura que el mercado laboral –y el sistema productivo que lo sustenta– pueda absorber a los miles de estudiantes que hoy llenan las aulas del sistema de educación superior.

Por otra parte, en contextos de crecimiento y alta desigualdad como el chileno en este período es posible que la desigualdad, una medida relativa, se reduzca aun si las distancias absolutas entre los hogares aumentan. Un ejemplo puede aclarar el punto. Según la encuesta Casen, el año 2000 los hogares ubicados en el decil 1 de la distribución (el 10% más pobre) tenían en promedio un ingreso de \$20.040 per cápita (en moneda de 2015). El ingreso per cápita en el decil más alto era de \$801.000. Entre 2000 y 2015 los ingresos del decil 1 crecieron en un 145% real, mientras que los del decil 10 lo hicieron en 30%, por lo tanto la desigualdad entre ambos grupos disminuyó; sin embargo, en términos absolutos los hogares del decil 1 aumentaron su ingreso real en \$29.000 (145% de \$20.040), mientras que los de los hogares del decil 10 crecieron en \$239.000 per cápita (30% de \$801.000), es decir, casi nueve veces más.

Un rasgo central de la desigualdad en el país es la concentración de ingreso y riqueza en el 1% más rico. Es una dimensión que no mide la encuesta Casen, puesto que las encuestas de hogares subestiman o no logran registrar los ingresos de la población más acomodada.

Para su medición se usan los registros tributarios, y para Chile estos datos muestran que el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico.

Porcentaje del ingreso nacional que obtiene el segmento de mayores ingresos, 2013 (distribución de perceptores individuales)

	0,1% más rico	0,9% siguiente	4% siguiente	Suma 1%	Suma 5%
Ingreso percibido	2,3	11,6	22,7	13,9	36,6
Ingreso devengado	19,5	13,5	18,5	33,0	51,5

Banco Mundial (2015).

El ingreso devengado incluye las utilidades no distribuidas que los dueños dejan en empresas como inversión.

El 0,1% de los ingresos más altos corresponde en lo fundamental a utilidades no distribuidas, que dan cuenta del 91% del total de ingresos de este segmento. El ingreso promedio del 0,1% se estima en \$140,5 millones mensuales antes de impuestos y en \$111,1 millones netos (año 2013). No es que cada persona de las 9.900 que integran el 0,1% más rico obtenga ingresos de \$111 millones mensuales después de impuestos, sino que algunas de ellas en el tope del segmento son propietarias o socias de las mayores empresas del país y obtienen utilidades muy altas, que elevan el promedio. En cualquier caso, se trata de un grupo con ingresos muy elevados, puesto que el piso de entrada se estima en \$26,5 millones antes de impuestos, y entre \$17,2 y \$21,1 millones después de impuestos, dependiendo del porcentaje que corresponda a utilidades retenidas. La mayor parte de estos ingresos financia inversiones que por una parte contribuyen al crecimiento de la economía y por otra acrecientan la riqueza de sus dueños, en la forma de capital accionario y otros tipos de activos productivos o financieros.

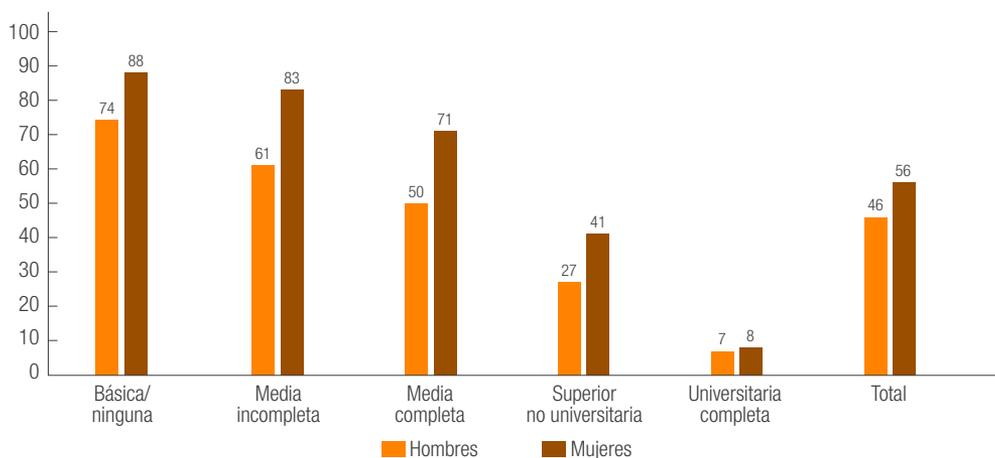
No se dispone de la información necesaria para saber si la concentración de los ingresos en el 1% más rico ha aumentado o disminuido en las últimas décadas, pero el fuerte crecimiento de los activos de los grupos económicos hace muy improbable que esta dimensión de la desigualdad se haya reducido.

Así, persiste la percepción de que las distancias no se acortan. De hecho, entre los años 2000 y 2016 el porcentaje de personas que declaran estar muy de acuerdo con la frase “las diferencias de ingresos son muy grandes” aumenta de un 42% a un 52%. Las reducciones recientes en los indicadores de desigualdad de ingreso en la encuesta Casen no compensan el hecho de que Chile sigue siendo un país de mucha desigualdad socioeconómica con concentración en el tope, y que su mantención en el tiempo descansa en mecanismos de reproducción profundamente enraizados en la institucionalidad, la cultura y la estructura productiva del país.

Salarios bajos e inseguridad laboral

La elevada desigualdad de ingresos en Chile también se explica por los bajos salarios que afectan a un gran número de trabajadores. Si se define un salario bajo como aquel que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio en ausencia de otras fuentes de ingresos (es decir, uno que no permita a un trabajador mantener a una familia de tamaño promedio sobre la línea de pobreza), la mitad de los asalariados con jornada de treinta y más horas semanales obtenía un salario bajo en 2015. El porcentaje es obviamente muy elevado, y es una muestra de que en el país hay un problema importante en materia de remuneraciones.

Porcentaje de trabajadores con salario bajo según nivel de escolaridad



Elaboración propia sobre la base de la encuesta Casen 2015.
Considera asalariados entre 18 y 65 años que trabajan 30 o más horas semanales.

Los salarios bajos tienen además una clara expresión de género. Las trabajadoras tienen una probabilidad 10 puntos superior que los hombres de recibir una paga baja, que aumenta a 20 puntos en el segmento de trabajadores con estudios secundarios. Otro dato significativo es que el 71% de las mujeres con enseñanza media completa recibe un salario bajo por su trabajo, así como el 83% de aquellas con estudios medios incompletos. Incluso aquellas con estudios superiores del área técnico-profesional, o universitarios incompletos, enfrentan una probabilidad de 44% de obtener un salario bajo. Hay para ello una diversidad de razones: porque tienen trayectorias laborales más interrumpidas en razón de la maternidad, porque asumen la mayor parte del trabajo en el hogar, por prácticas discriminatorias de los empleadores y porque hay una desvalorización del trabajo femenino, que se refleja en que son habituales los bajos salarios en las ocupaciones con numerosas mujeres.

Esta gran masa de salarios bajos produce una inseguridad económica que está fuertemente estratificada por nivel socioeconómico. En la encuesta PNUD-DES 2016 se preguntó a los trabajadores si el sueldo que recibían cubría sus necesidades. Al estratificar por nivel socioeconómico a partir de categorías ocupacionales, las diferencias son claras: si casi un 90% de los trabajadores de las clases medias altas y un 83% de los trabajadores de las clases medias declaran que el ingreso total de su hogar “les alcanza bien” o “les alcanza justo”, lo mismo es cierto para solo un 58% de los trabajadores de las clases medias bajas, y para apenas un 47% de las clases bajas. Para una enorme cantidad de trabajadores chilenos, el salario simplemente no es un soporte eficiente para salir adelante.

Estas diferencias salariales se relacionan con trayectorias laborales cuya estabilidad también está fuertemente estratificada. Datos obtenidos para este trabajo muestran que, al considerar un período de 132 meses (11 años), los trabajadores hombres de bajo salario tuvieron en promedio 10 empleos formales, mientras que los hombres con salario alto tuvieron en promedio 4,7 empleadores en empleos formales. Los primeros estuvieron empleados en el 62% de los meses del período, con una duración promedio de solo 8,2 meses por empleo formal. En contraste, los hombres con salario alto trabajaron un 87% de los meses en el período, con una duración promedio de casi 25 meses por empleo.

Las numerosas transiciones entre un trabajo y otro que experimentan los trabajadores hombres y mujeres que ganan salarios bajos pueden incluir períodos de desempleo, inactividad y trabajo informal, lo que agrega otra capa de inestabilidad y riesgo a sus vidas: es muy distinto vivir con un salario bajo pero seguro y estable que con salarios bajos en empleos de corta duración, con períodos de inactividad o empleo informal, e incertidumbre sobre el futuro laboral.

Características de las trayectorias laborales según nivel del salario inicial (11 años)

	Meses en empleos formales (sobre un total de 132)	Número de empleadores	Duración media en el empleo (meses)	% de meses en empleo formal y contrato indefinido
Salario bajo				
Hombres	82	10,0	8,2	28,7
Mujeres	73	6,3	11,5	30,7
Salario medio				
Hombres	105	7,5	13,9	51,2
Mujeres	99	5,3	18,9	58,9
Salario alto				
Hombres	115	4,7	24,7	72,7
Mujeres	109	4,4	25,0	72,3
Total	92	7,5	12,2	42,2

Elaboración propia sobre la base de los registros administrativos del Seguro de Cesantía.

La inseguridad debida a la alta rotación de empleos –y el miedo asociado a una temporada larga de cesantía– se convierte en un *habitus*, una disposición a actuar y una percepción del mundo, llena de incertezas. Como dice Ramón, reponedor en un supermercado, el miedo al despido es como “una herencia, pegada en la piel”:

Sigo con el pensamiento de cuando era niño, que la vida es difícil. Por ejemplo, no ha cambiado un centímetro lo que le escuchaba a mi padre, que decía “a lo mejor mañana van a echar gente”, porque esa palabra, que a lo mejor mañana van a echar gente en los trabajos, la sigo escuchando hasta el día de hoy. Es como una herencia, pegada en la piel de toda la gente que depende de un salario. El temor de que voy a perder el trabajo, me van a echar (...). Es como una canción nacional, que cada cierto tiempo tiene que haber una persona que se acuerde y la repite.

A la desigualdad que se origina en los bajos salarios se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios de vida requeridos para la vejez. Alrededor de la mitad de los jubilados percibe hoy una pensión inferior a un valor mínimo, definido en este trabajo como un 70% del salario mínimo. Este resultado considera la pensión contributiva (pagada por la AFP o el IPS) más el monto que provee el Estado como aporte previsional solidario (APS). En ausencia de este componente, un 72% de adultos mayores habría recibido una pensión inferior a la mínima en 2015.

Pensionados de 65 y más años con pensión bajo el mínimo (%), según nivel de escolaridad

	Distribución aproximada del total de pensionados según escolaridad				Total
	50% inferior	20% siguiente	20% siguiente	10% superior	
1990	48,4	31,5	21,0	7,6	37,1
2000	68,9	60,1	29,3	7,3	53,3
2009	66,8	60,4	36,0	18,9	52,4
2015	89,6	73,1	62,4	33,0	72,5
2015 ⁽¹⁾	57,2	49,2	41,0	21,3	47,0

Elaboración a partir de encuestas Casen de los años respectivos.
El mínimo se define como el 70% del salario mínimo de cada año.
(1) Incluye APS.

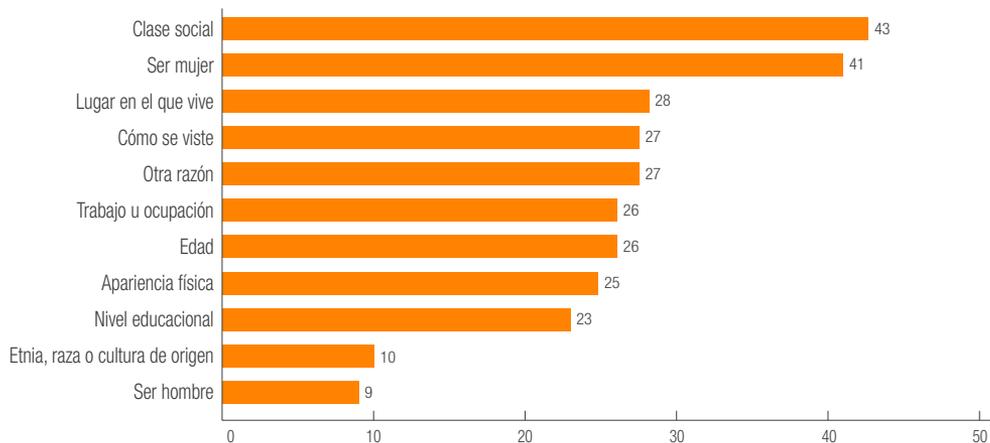
El problema de las bajas pensiones genera una marcada sensación de inseguridad, que es más aguda en los estratos bajos: menos de la mitad de las personas de entre 24 y 54 años de los quintiles 1 y 2 cree que contará con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas cuando sean adultos mayores. Esta inseguridad es aun mayor en las mujeres, un resultado consistente con la menor cobertura y los menores montos de las pensiones que reciben.

Desigualdades en el trato social

Una de las expresiones más sensibles y menos estudiadas de las desigualdades socioeconómicas es el trato diferenciado que reciben las personas por razón de su posición en la estructura social. En Chile las desigualdades cristalizan en modos de interacción, en cómo las personas son tratadas, en cómo el respeto y la dignidad se confieren o deniegan en el espacio social.

En la encuesta PNUD-DES 2016, el 41% de la población encuestada declara haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos, desde ser pasado a llevar, ser mirado en menos, ser discriminado o tratado injustamente. Consultadas las personas sobre las razones, la clase social (43%) y ser mujer (41%) aparecen a considerable distancia de todas las demás como las razones más frecuentes de la experiencia de malos tratos. En tercero, cuarto y sexto lugares aparecen razones íntimamente ligadas a la posición social de las personas: el lugar donde vive (28%), su vestimenta (28%) y su trabajo o ocupación (27%). La experiencia de las personas encuestadas coincide con el tono de las conversaciones cotidianas de los chilenos: Chile es un país clasista. El machismo y el clasismo gatillan todo tipo de experiencias de menoscabo y discriminación.

Razones percibidas por las que se reciben malos tratos



Elaboración propia a partir de encuesta PNUD-DES 2016.

El porcentaje se calcula solo para el 41% de aquellos que tuvieron alguna experiencia de malos tratos. Cada entrevistado podía elegir múltiples alternativas, por lo que no suman 100%.

Los relatos que surgen en entrevistas y grupos de discusión sacan a la luz el amplio repertorio de que se dispone para hablar del trato social en Chile. El vocabulario para referirse a los malos tratos es profuso: “Te miran con desprecio”, “te ponen la mano encima”, “te apuntan con el dedo”, “te pasan a llevar”, “pisotean a los demás”, “humillan a las personas”.

El léxico es tan rico como las distinciones en que las personas se basan para detectar gestos, tonalidades, posturas y silencios que se pueden leer, casi sin ambigüedad, como formas de menoscabo. Esta fineza en la capacidad de percibir tratos denigrantes también corre a la hora de perpetrarlos: el trato irrespetuoso puede ser vociferante pero también, y a menudo lo es en Chile, muy sutil. En una entrevista realizada en la región de Valparaíso, un obrero resumía así su experiencia de vestir su ropa de trabajo en un espacio comercial: “Te miran con desprecio, o te miran como a un delincuente”. Una secretaria comentaba en un grupo de discusión su experiencia al salir a la calle:

No me siento que me traten con igualdad, porque, por ejemplo... si voy a comprar al [centro comercial del sector oriente], si no voy vestida regia, no me tratan igual que a las otras secretarias... Claro, tengo que disfrazarme de... de cuica. Y claro, si voy pa' otro lado me tratan de otra manera.

Se puede hablar con propiedad de que en Chile se evidencia una fuerte “desigualdad del trato social”. El análisis muestra que pertenecer a las clases más acomodadas facilita significativamente no tener experiencias de malos tratos, una ventaja considerable cuando lo que está en juego son las formas de reconocimiento social desde las cuales las personas pueden desplegar su subjetividad.

La evidencia muestra además que los lugares en que más recurrentemente se reciben malos tratos son el trabajo, los servicios de salud y la calle. La calle ocupa un lugar especial en el imaginario de la desigualdad, porque allí se perciben no solo las diferencias en infraestructura sino la posibilidad de vivir en barrios más o menos seguros, más o menos violentos, más o menos limpios. En una investigación especialmente realizada para este libro se observó, en la ciudad de Santiago, que en todos los niveles socioeconómicos las personas están determinando constantemente si el lugar por el que transitan corresponde o no a su grupo de referencia. Hay barrios, calles, espacios que son propios y los hay ajenos: para los habitantes de la ciudad existe siempre “otro Santiago”, el de los otros.

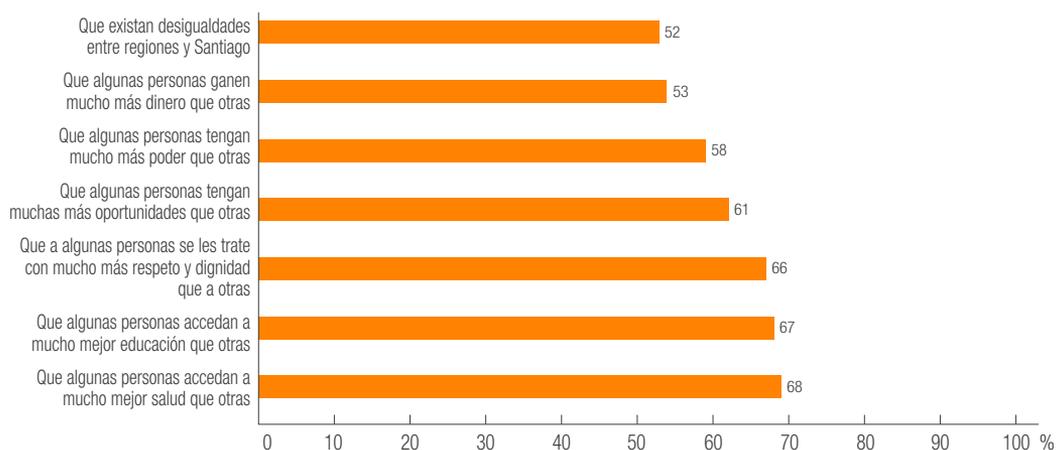
Esta territorialización provee el contexto para que se expresen estereotipos y estigmas sociales, especialmente sobre aquellos que no pertenecen al territorio que emerge de la apropiación. El estigma permite identificar a personajes “peligrosos” o situaciones en principio amenazantes, a la vez que es un peso, una carga que se porta y de la cual algunos no pueden desprenderse. En la calle, y en función de la lógica de lo propio y lo ajeno, para aquellos pertenecientes a las clases bajas o sectores populares caminar por comunas de estratos altos implica someterse a un trabajo de ocultamiento y disimulo si no quieren padecer las sanciones diversas –y a veces implacables– que reciben aquellos que entran en terreno ajeno.

Sentimientos de injusticia ante las desigualdades actuales

Un elemento esencial para entender el fenómeno de la desigualdad social son los sentimientos de injusticia que produce. En la discusión pública una diferencia solo aparece como desigualdad en relación con un determinado ideal de igualdad, esto es, cuando se percibe que ciertos bienes socialmente deseados (materiales o simbólicos) están distribuidos de manera injusta.

Datos de la encuesta PNUD-DES muestran que la molestia frente a la desigualdad se concentra en las desigualdades de acceso a la salud y la educación, y en que a algunas personas se las trate con mayor respeto y dignidad que a otras. En una escala del 1 al 10, donde 10 indica “muchísima molestia”, alrededor del 67% de la población declara que le molesta mucho (9-10) la desigualdad en esos tres ámbitos (68% salud, 67% educación, 66% trato respetuoso).

¿Del 1 al 10, cuánto le molesta a usted cada una de las siguientes situaciones? (porcentaje de menciones 9 y 10)



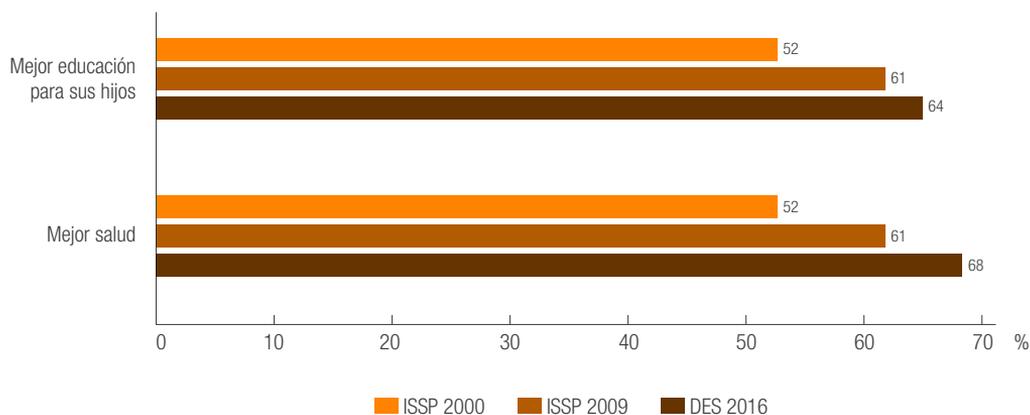
Elaboración propia a partir de encuesta PNUD-DES 2016.

En entrevistas y grupos de discusión para este volumen también se muestra con claridad que las personas toleran cada vez menos que las diferencias de ingresos que caracterizan al país tengan consecuencias en la forma en que son tratadas, sea que unos reciban un trato privilegiado o que otros sean menoscabados o tratados indignamente por razón de su posición social. En todos los grupos de discusión se planteó que las desigualdades económicas no debían ser razón para el menoscabo. La conclusión era evidente:

El tema del respeto y la dignidad... eso yo creo que ni siquiera puede ser ambiguo, o sea, no... no porque gane menos dinero, o más dinero, y tenga una posición o no, el respeto debe existir para todos lados, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo (grupo de discusión, mixto, clases bajas, Santiago).

Por otra parte, datos comparables en el tiempo muestran que la percepción de injusticia en salud ha aumentado en los últimos quince años. Lo mismo ocurre en el caso de la educación. Que en las dos desigualdades que más molestan a la población se evidencie un aumento de entre 12% y 16% en el rechazo es un signo claro de que la tolerancia ante algunas desigualdades han cambiado.

Porcentaje de la población que está en desacuerdo con la expresión “es justo que aquellos que pueden pagar más tengan acceso a una mejor salud/educación para sus hijos”



Elaboración propia a partir de encuestas ISSP-CEP 2000-2009 y PNUD-DES 2016.

Las molestias referidas a desigualdades en el plano de la educación se deben revisar a la luz de lo que significa y se espera de ella actualmente. Es una constante del siglo XX chileno que se le atribuya un alto valor a la educación, y en los últimos treinta años esa apreciación ha experimentado un nuevo ímpetu, como atestigua el papel central que le han dado los movimientos estudiantiles desde mediados de la década de 2000. Dentro de este relato nacional, la mayoría de los entrevistados o participantes de los grupos de discusión justificaba el sacrificio personal (dobles o triples jornadas) por el logro de que sus hijos estudien y “sean más que uno”. En general la expectativa referida a la educación de los hijos es uno de los pilares de las narrativas de movilidad social. En la educación se ha depositado la posibilidad misma de terminar con la vulnerabilidad o la inseguridad. Como dice un obrero:

Yo tuve que arrancar de Curanilahue pa’ acá pa’ Santiago... para que mis hijos fueran mejor (...). Te sacái sudor pa’ que tus hijos estudien en la universidad. Gracias a Dios se recibió uno y me queda una (...). Aquí yo trabajo en dos turnos, pa’ que tu hijo sea mejor que tú, eso es lo que yo hago (grupo de discusión, hombres, clases medias bajas, Santiago).

Finalmente, el sentimiento de injusticia en salud se expresa en el fuerte rechazo a una atención de salud de buena o mala calidad en función de los ingresos. La sensación de ser objeto de

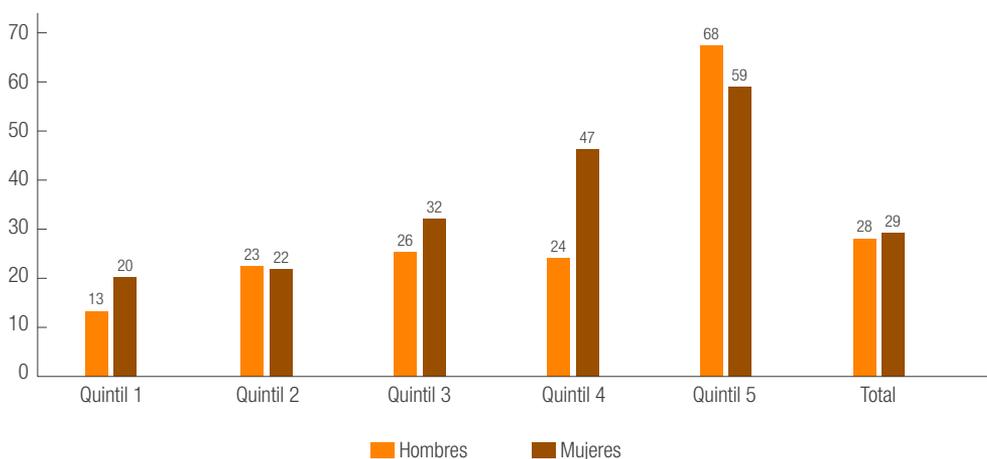
tratos injustos y la irritación en los servicios de salud se acrecienta cuando se percibe que hay un acceso diferenciado y la calidad del trato recibido depende del dinero que se tenga. “Tú desde que pisái la clínica ya estái pagando. Aquí [en el hospital público] no, aquí no estái pagando, pero te atienden como el forro. En cambio arriba no, es más, mejor atención. ¿Por qué? Porque hay plata”, dice un entrevistado de la zona poniente de Santiago.

Un punto neurálgico en esa irritación es la espera, pues se relaciona con sentirse desatendido pero sobre todo con la sensación de no tener otra opción más que esperar. La espera irrita porque se sabe que con dinero habría una salida alternativa. Y el malestar crece cuando se comparan los tiempos de espera con el tiempo efectivo de atención:

¿Sabe en qué se nota la desigualdad? En la salud... Una persona que tiene plata puede ir a un doctor y el doctor se va a comportar como doctor y te va a decir: “Tienes esto, tómate esto y te vas a recuperar”. Uno, pobre, va al consultorio, de aquí a que te den hora y te atiendan... y tienen promedio diez minutos máximo para atenderte, entonces: “Un resfrío, pa’ la casa” (grupo de discusión, mujeres, clases bajas, Santiago).

También la confianza en que se tendrá atención de salud en caso de enfermedad catastrófica o grave está claramente estratificada. El porcentaje de personas que dice tener mucha o bastante confianza en este acceso es de 63% en el nivel socioeconómico alto y de solo 17,5% en el nivel socioeconómico bajo, es decir, parece un lujo al que pocos pueden acceder.

Población mayor de 18 años que confía en que tendrá atención médica oportuna en caso de enfermedad catastrófica o crónica grave, 2016 (%)



Elaboración propia a partir de datos de la encuesta DES 2016.
El porcentaje reúne a quienes tienen mucha o bastante confianza (versus poca o ninguna confianza).

Las diferencias justas y el sentido del “esfuerzo individual”

La investigación realizada para este volumen muestra que la imagen del esfuerzo individual es siempre clave en las narrativas biográficas: es el gran motor de las trayectorias de vida, lo que explica haber dejado atrás la pobreza o incluso la miseria. En las clases bajas es la imagen de la lucha personal que permite surgir frente a la adversidad del entorno y a la posibilidad de perderse en la calle, en las drogas, en la delincuencia. En las clases medias bajas, sintetiza la lucha por mantener la posición social ante dificultades o tragedias biográficas (despidos, enfermedades, crisis familiares) que amenazan con desbaratar lo construido. En las clases medias, es la capacidad individual de emprender, tomar riesgos y mantenerse a flote, asumiendo los costos simbólicos y de recursos que ha significado desplazarse en la escala social.

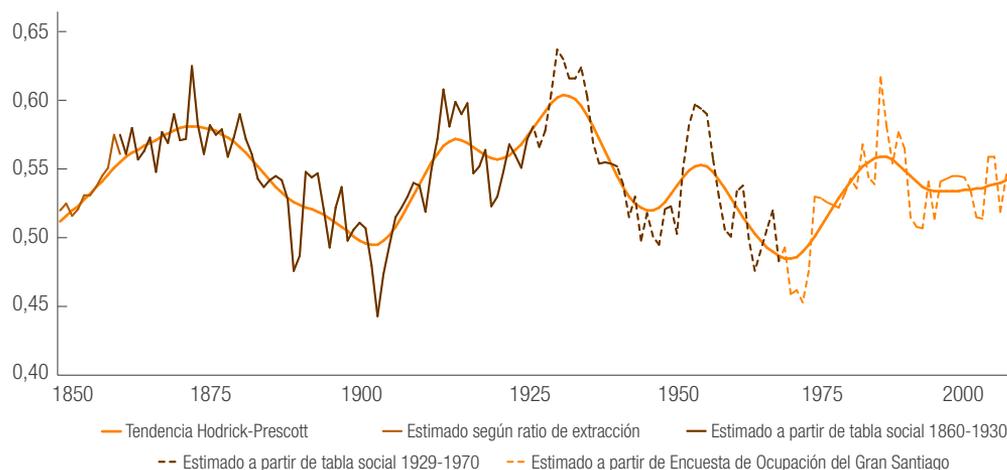
Por ello, no es de extrañar que en la encuesta PNUD-DES 2016 el 84% de las personas esté de acuerdo con la afirmación “las personas que trabajan duro merecen ganar más que las que no lo hacen” y que el 93% esté de acuerdo con la expresión “la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro”. Los individuos se reconocen a sí mismos en el trabajo duro, y perciben que han tenido que arreglárselas solos para surgir en la vida o, al menos, no caer. Dicho eso, en el discurso social hay juicios que responsabilizan a los grupos más pobres por su situación. Algunos creen que, si las personas salen adelante solo gracias a su esfuerzo, aquellos que no lo han hecho es por flojera o falta de iniciativa. Sin embargo, no es la opinión dominante. Hay tolerancia a las diferencias de ingresos no tanto por una estigmatización hacia abajo sino porque se reconoce al “profesional esforzado”. En ese reconocimiento se sintetiza el esfuerzo –del que estudia– y la voluntad por alcanzar una mejor posición, por “seguir el buen camino”. En la discusión grupal, uno de los argumentos centrales para justificar las diferencias salariales es que la gente con título profesional se merece ganar más que los que no lo tienen, por el gran esfuerzo que han hecho y el tiempo que han invertido. En los sectores populares, además, eso permite poner la esperanza de movilidad social en las nuevas generaciones (quienes, estudiando, serán “más que uno”).

Asociado a esta idea del mérito como esfuerzo, predominante en Chile, surge un discurso crítico sobre los grupos altos. La percepción es que, pese al esfuerzo puesto en los estudios o en el trabajo, las mejores posiciones sociales están clausuradas para la mayoría, porque las clases altas privilegian a los suyos y sacan provecho de su origen. Esto atenta contra la posibilidad de que quienes vienen de más abajo puedan ver premiados su esfuerzo y sacrificio. Las clases altas se perciben como viviendo de sus privilegios. Los datos de la encuesta PNUD-DES reafirman este resultado cualitativo: mientras el 93% de las personas piensa que la clase media es gente de esfuerzo, solo el 38% cree lo mismo sobre las personas identificadas como pertenecientes a la clase alta.

La pesada herencia: la historia larga de la desigualdad en Chile

Aun siendo una buena noticia, las bajas recientes en los indicadores de desigualdad socioeconómica no son, en perspectiva, una novedad histórica. El país ha conocido otros períodos de bajas (y alzas), pero en promedio la desigualdad se ha mantenido relativamente estable desde mediados del siglo XIX. En torno a un coeficiente de Gini de aproximadamente 0,53 ha habido grandes oscilaciones, por factores tanto económicos y comerciales como de economía política o geopolíticos.

Desigualdad de ingreso personal (Gini) en Chile en el largo plazo, 1850-2009



Rodríguez Weber (2017).

La revisión histórica muestra que Chile se ha distinguido siempre por una elevada desigualdad socioeconómica, que ha variado en intensidad y carácter a lo largo del tiempo. En el siglo XX se observan las mayores fluctuaciones: mientras en las primeras dos décadas las clases altas aún conservaban un predominio político, económico y social casi sin contrapeso, entre 1930 y 1973 hubo un proceso de creciente democratización, de la mano del cual las desigualdades se moderaron. Luego la dictadura militar impuso cambios políticos y económicos que derivaron en nuevas y significativas desigualdades.

¿Ha sido Chile un país excepcionalmente desigual en la comparación internacional? En el siglo XX fue sin duda muy desigual respecto de los países avanzados, pero no muy distinto de las demás naciones de América Latina. Para épocas previas, la evidencia disponible muestra un cuadro de elevada desigualdad global en que Chile ya aparecía como comparativamente desigual; lo peculiar del siglo XX fue el gran progreso de los países industrializados en el camino hacia una mayor igualdad, proceso que los países latinoamericanos no siguieron.

Un hito fundacional de la desigualdad en Chile fue la asignación de tierras que el gobierno colonial realizó a inicios del siglo XVII, y que tuvo por beneficiarios a los españoles y sus descendientes blancos, en especial aquellos de mayor alcurnia o fama militar. Esta asignación fue el germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró tres siglos y en torno de la cual se estructuró una sociedad rural estratificada entre patrones, empleados, inquilinos y peones.

A esta clase alta tradicional se sumaron luego inmigrantes vascos, que hicieron fortuna durante el siglo XVIII, e ingleses y franceses, que se enriquecieron en el siglo XIX. Estas olas de inmigrantes prosperaron en los negocios, adquirieron tierras y se emparentaron con las familias de la elite. La propiedad rural confirió poder y estatus a sus dueños en un período en que la mayor parte de la población residía en el campo y en que la vida transcurría en gran medida dentro y alrededor de la hacienda.

Otro elemento de largo plazo en la constitución de la estructura socioeconómica del país ha sido la explotación de las riquezas mineras. La minería ha sido la principal exportación durante casi toda la historia de Chile: oro en los primeros años de la Conquista, plata y cobre en la Colonia y el siglo XIX, salitre a la vuelta del siglo y cobre desde 1930. En tiempos de precios altos los excedentes fueron muy elevados y los dueños de los yacimientos, sus financistas y los que comerciaban con el producto amasaron las mayores fortunas del país.

Siempre hubo una elite económica que concentró una parte significativa del capital y, por tanto, del ingreso. Ciertamente esta elite se ha renovado, tanto en su composición como en sus fuentes de ingresos, y hubo períodos de mayor concentración económica que otros, pero siempre un número reducido de familias ha tenido la propiedad o el control de los activos productivos más rentables. Un período de transformación de la elite económica chilena se dio durante el cambio de modelo económico impuesto por la dictadura militar: el mapa de los actuales grupos económicos en Chile está fuertemente influenciado por este proceso.

El Estado fue un actor fundamental durante la mayor parte del siglo XX. A través de la provisión de salud y educación hizo posible un enorme avance en las condiciones de vida de los sectores populares, y los empleos públicos dieron sustento a la naciente clase media. Progresivamente, a través de las pensiones, el salario mínimo, la asignación familiar y otras transferencias y políticas sociales, fueron aumentando de manera significativa los ingresos de la población. También se legisló para normar y mejorar las condiciones de trabajo y las relaciones laborales. En este proceso los empleados resultaron más beneficiados que los obreros, y los trabajadores rurales y pobladores urbanos accedieron de forma bastante tardía a la seguridad social y las leyes laborales. De este modo, la labor del Estado en la provisión de ingresos y servicios sociales no solo se relacionó con una mejora de las condiciones generales de vida, sino también con la estratificación socioeconómica de cada época.

Cabe notar que las relaciones de producción no siempre se dieron entre trabajadores y propietarios del capital: también ha habido a lo largo de la historia una economía informal en la cual los sectores populares producían para sí mismos e intercambiaban bienes y servicios. A mediados del siglo xx la Cepal denominó “heterogeneidad productiva” al fenómeno que se daba cuando un grupo de empresas formales de buena productividad, que pagaba salarios altos y cuya producción abastecía a los sectores con mayor poder de compra, coexistía con empresas informales y de baja productividad, que empleaban a trabajadores menos calificados y producían para segmentos con menor capacidad de compra. En este caso, la pobreza de segmentos importantes de la población está más relacionada con la falta de desarrollo que con problemas de distribución de ingresos. Esta estructura —que se repite en todo el continente— genera hasta el día de hoy circuitos productivos muy diferenciados.

Por último, la desigualdad socioeconómica en Chile ha tenido una connotación étnica y racial. Las clases altas se configuraron como predominantemente blancas, mientras que mestizos e indígenas ocuparon un grado más bajo en la jerarquía social, y negros y mulatos uno aun más bajo. Incluso hoy el aspecto físico es un buen predictor de la clase social en Chile, lo que delata a una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y la discriminación en el acceso a las oportunidades.

Apellidos y posición social en cohortes nacidas entre 1940 y 1970

50 apellidos con mayor porcentaje de profesionales de prestigio (ordenados según %)				50 apellidos donde no hay un solo profesional de prestigio (ordenados según número de casos)			
Matte	Ariztía	Werner	Schmidt	Aillapan	Chequeman	Calfin	Coilla
Délano	Astaburuaga	Etcheverry	Richards	Mariman	Escares	Taiba	Murga
Zegers	Campbell	Baltra	Otero	Tranamil	Colivoro	Pailahueque	Alcapan
Soffia	Moore	Manzur	Petersen	Huenchual	Lepin	Huenten	Lincopi
Risopatrón	Alliende	Peirano	Hott	Carilao	Cayupan	Catrinao	Huenupan
Tassara	Solari	Tagle	Diez	Huenchu	Neculpan	Huaiquipan	Gamin
Edwards	Walker	Lyon	Pons	Huala	Caripan	Llanquiman	Yevilao
Parga	Klein	Niklitschek	Garretón	Cheuque	Ancan	Millao	Huaiquimil
Errázuriz	Parodi	Enríquez	Echenique	Millahual	Garabito	Cumian	Huenupi
Puelma	Bunster	Undurraga	Neumann	Colipi	Necul	Levicán	Curihuinca
Canessa	Hitschfeld	Larra	Larraín	Cona	Maliqueo	Godoi	Melinao
Vial	Moller	Montt		Lienlaf	Cheuquepil	Curilen	
Soler	Irarrázaval	Vicuña		Porma	Huenulef	Andana	

Elaboración propia a partir de datos del Servicio Electoral. Se incluyen los cincuenta apellidos con mayor frecuencia en la población, de un total de 110 que cumplen con el criterio. El análisis consideró solo los apellidos que tienen una frecuencia mínima de doscientos casos en la base de datos, pues para números más pequeños los porcentajes no proveen información fiable. Se considera como profesiones de prestigio a ingenieros, médicos y abogados.

Para este libro se trabajó con datos sobre apellidos de más de ocho millones de adultos chilenos, junto a información sobre sus oficios o profesiones, sexo y edad, con cuya información se construyó un cuadro que lista los apellidos con mayor representación porcentual

en las tres profesiones más prestigiosas y mejor remuneradas en el país: médicos, abogados e ingenieros. En el módulo izquierdo se listan los cincuenta apellidos más representados en estas profesiones, y en el derecho los apellidos sin una sola persona en ellas. Los resultados hablan por sí solos: a la izquierda se registran mayoritariamente apellidos vinculados a la aristocracia castellana-vasca y otros de ascendencia inglesa, francesa, italiana y alemana; a la derecha, apellidos mayoritariamente de pueblos originarios.

Seis nudos de reproducción y transformación de la desigualdad socioeconómica

La desigualdad socioeconómica es un fenómeno multidimensional y dinámico, con diversos componentes que interactúan entre sí. Pero su complejidad no impide delinear sus límites y detectar aquellos nudos que más influyen en su reproducción en el tiempo. En el marco de este trabajo se han detectado seis espacios en torno de los cuales se reproduce en gran medida la desigualdad socioeconómica en Chile. Seis espacios donde también se abren oportunidades y desafíos si lo que se busca es reducir la desigualdad e impulsar cambios sostenibles en el tiempo.

Primero, una estructura productiva con circuitos diferenciados de productividad, cualificaciones y calidad del empleo, lo que deriva en una gran masa de trabajadores con bajos salarios

La evidencia apunta a que un núcleo duro de la desigualdad en Chile es la existencia de circuitos de empresas de alta productividad, con trabajadores calificados que reciben mejores salarios y tienen empleos más estables, y su contracara, empresas de baja productividad, bajos salarios, trabajadores menos calificados y alta rotación. La brecha de competencias laborales entre los trabajadores tiende a permanecer o incluso incrementarse en el tiempo, y lo propio ocurre con la brecha de productividad entre las empresas. Como resultado, el 54% de la desigualdad de los salarios individuales se explica por las diferencias salariales que existen entre tipos de empresas.

La calidad del trabajo también varía: el 35% de los trabajadores que se ocupa en empresas de baja productividad cambia de empleo antes de un año, mientras que en firmas del quintil superior de productividad la tasa de rotación es de 23%. Ello se debe en parte al tipo de contrato laboral que usan unas y otras firmas. En las primeras solo el 57% de los trabajadores tiene un contrato de duración indefinida, porcentaje que aumenta al 87% en las empresas de alta productividad.

A esto se suma que las instituciones del mercado laboral, como los sindicatos y la normativa de la negociación colectiva, que en países más igualitarios han tenido un papel importante en la reducción de desigualdades, en Chile hoy son marginales por efecto de la legislación

basada en el plan laboral de 1979, que favorece a los empleadores mediante diversos mecanismos. En cuanto al porcentaje de trabajadores cubiertos por los acuerdos de negociación colectiva, por ejemplo, Chile ocupa el último lugar en la OCDE (6% vs. 54% promedio) y está muy por detrás de los países más desarrollados de la región.

Características de empleos y trabajadores según quintil de productividad de las empresas

Quintil de productividad	% de rotación laboral	% de contratos indefinidos	% de trabajadores con educación superior	% de trabajadores de baja calificación
1	35,1	57,6	17,9	42,3
2	33,2	62,7	14,6	38,9
3	30,5	74,8	29,5	30,5
4	29,6	75,9	28,2	30,9
5	23,4	87,2	48,6	17,0
Total	30,3	71,6	27,8	32,0

Elaboración propia a partir de la Encuesta Longitudinal de Empresas de 2013.

En suma, una parte importante de la desigualdad socioeconómica en Chile se funda en factores estructurales –diferencias de productividad, capacidad instalada de producción, disponibilidad de capital para inversiones, educación de los trabajadores–, a los que se añade la normativa laboral. Modificar este estado de las cosas sería arduo pues supone nada menos que poner en cuestión el modelo productivo, lo que requiere de información y conocimientos hoy muy escasos. Por otra parte, los procesos de modernización productiva y automatización están causando preocupación en todo el mundo por el impacto que tendrán sobre la cantidad y naturaleza de los empleos en los sectores de alta productividad y alta remuneración.

Segundo, un patrón en que el capital y los ingresos están muy concentrados en un conjunto de grupos económicos, cuya propiedad está en manos de un número reducido de personas

Por sus niveles de producción y ventas, las grandes empresas del país proporcionan cuantiosos ingresos a sus dueños, sus plantas directivas y profesionales, y a aquellos que les ofrecen servicios legales, financieros y otros. Por supuesto, empresas que operan a gran escala hay en todo el mundo; lo que distingue a Chile y otros países de la región es que la propiedad de estas empresas está concentrada en un número relativamente pequeño de dueños y socios, que configuran los denominados grupos económicos. Este es un factor crítico de la concentración del ingreso y la riqueza en Chile.

Las 75 empresas más grandes del país tienen ingresos por ventas que superan en cada una de ellas los mil millones de dólares anuales, y por sí solas dan cuenta del 63% de las ventas del segmento de grandes empresas. Sus dueños, los grupos económicos que operan actualmente en Chile, ya existían en 1990 pero su tamaño era muy inferior al actual. Los veinte grupos

más grandes tenían en conjunto en 2015 activos cuyo monto es 10,6 veces más alto que el de los veinte mayores grupos que operaban en 1990.

Activos de las empresas controladas por los grupos más grandes (MM\$, 2015)

	1990	2015	2/1
5 + grandes	11.335	140.700	12,4
10 + grandes	20.536	201.700	9,8
20 + grandes	22.984	244.400	10,6

Lefort y Walker (2006), Universidad del Desarrollo (2015).

El espectacular crecimiento de los grupos económicos se ha visto favorecido por las bajas tasas del impuesto a la renta en el período, impuesto cuyo diseño proviene de la reforma tributaria de 1984, que privilegió el fomento del ahorro y la inversión por sobre la recaudación fiscal o la redistribución de ingresos. Concretamente, el crecimiento se debe en parte significativa a que el grueso de sus utilidades tributó a una tasa cercana al 20%. De no haber existido el FUT (Fondo de Utilidad Tributaria), recientemente derogado, las utilidades habrían tributado a una tasa dos veces más alta y la acumulación de capital y de riqueza sería mucho menor. Aunque quizás el crecimiento económico habría sido también menor, a menos que el Estado hubiese canalizado eficientemente en ahorro e inversión los recursos recaudados. Uno de los efectos del FUT fue que la gran mayoría de estos fondos se reinvirtieron en los sectores que ya eran más productivos y rentables.

La concentración del ingreso y de la riqueza en los grupos económicos que controlan la propiedad de las empresas que generan parte significativa del PIB nacional –y del destino de las inversiones– es otro núcleo duro de la desigualdad, que explica entre otros hechos la inconsistencia que hay entre el elevado ingreso per cápita del país y el bajo nivel de vida de la mayoría de la población, que no accede a los empleos provistos por este sector de alta productividad.

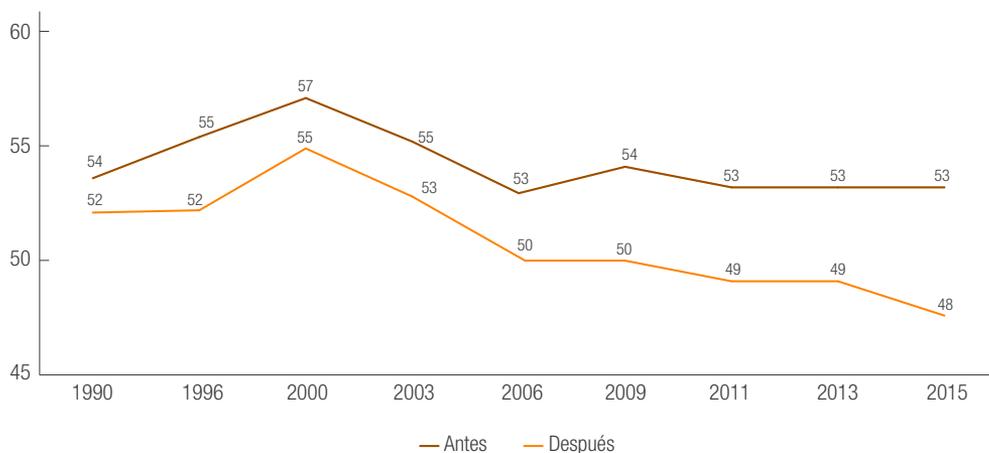
Tercero, un Estado insuficientemente involucrado en las tareas de redistribución y provisión de seguridades para los ciudadanos

En principio, los Estados tienen las facultades para inducir cambios significativos en la distribución de recursos, en plazos razonables y sin provocar disrupciones mayores en la sociedad. Los impuestos, las transferencias monetarias y los mecanismos de seguridad social reducen la desigualdad.

Las transferencias del Estado y el impuesto a la renta redujeron la desigualdad de ingreso en cinco puntos porcentuales del coeficiente de Gini en 2015, desde 52,6% a 47,6%. Este potencial redistributivo ha aumentado principalmente por la puesta en marcha de las pensiones solidarias en 2008, que hizo crecer significativamente el volumen de recursos transferidos

a los hogares vulnerables del país. Como se aprecia en el cuadro, el efecto redistributivo de la acción estatal es notoriamente mayor que en la década de 1990.

Efecto del impuesto a la renta y transferencias sobre el coeficiente de Gini



Elaboración propia a partir de datos de las encuestas Casen, años respectivos.

Con todo, la acción estatal resulta muy insuficiente para revertir la elevada desigualdad de ingresos que caracteriza al país: en la actualidad, el total del gasto en transferencias monetarias representa solo el 1% del PIB. Así, el impacto redistributivo de transferencias e impuestos en Chile es muy bajo comparado con los países de la OCDE, pero intermedio en América Latina: mayor que en México o Costa Rica, pero más bajo que en Argentina o Brasil.

En los países desarrollados de referencia la política fiscal redistributiva opera con impuestos a la renta progresivos de gran cobertura, y con transferencias que benefician al conjunto de la población o a gran parte de ella. Esa combinación de políticas tiene no solo mayor potencia redistributiva sino un carácter integrador, pues toda o la mayor parte de la población accede a los mismos beneficios. En Chile, en cambio, el impuesto a la renta tiene un lugar secundario frente al IVA (un impuesto regresivo), y las transferencias tienden a ser de bajo monto y se focalizan en los estratos más desfavorecidos.

Los gobiernos democráticos desde 1990 privilegiaron la expansión del gasto público en educación, salud y vivienda. Pero el acceso a estos servicios es segmentado por clases sociales, desde servicios gratuitos provistos por el Estado para los más pobres a servicios de calidad que las clases altas compran en el mercado. Con todo, el valor monetario de las transferencias gubernamentales en bienes y servicios es de todas formas muy significativo. Los hogares del quintil más pobre más que duplican, en promedio, sus recursos si se suma a sus ingresos el equivalente monetario de los servicios recibidos; en el segundo quintil, el valor de estas transferencias representa el 50% de los ingresos monetarios. Para el tercer, cuarto y quinto

quintiles corresponde al 28%, 15% y 3%, respectivamente. Este resultado no es tan bueno como pareciera a primera vista, pues refleja una estructura socialmente muy segmentada de estos servicios: en Chile la población más pobre accede a servicios que le entrega gratuitamente el Estado en instituciones públicas y que tienen problemas de calidad (educación) o de largas esperas (salud), los sectores medios acceden preferentemente a servicios privados de mejor calidad, que son cofinanciados por ellos y el Estado (educación particular subvencionada, atención de libre elección en Fonasa), y los grupos de altos ingresos adquieren servicios privados de mayor calidad y costo, sin mediar financiamiento público. En los países de la OCDE la distribución está mucho menos segmentada; las transferencias públicas se distribuyen de modo más parejo entre la población.

Recursos recibidos como porcentaje del ingreso monetario de los hogares, por quintil de ingresos

	Quintil 1	Quintil 2	Quintil 3	Quintil 4	Quintil 5	Total
Educación	63,3	26,9	14,3	6,4	1,2	8,6
Salud	30,2	15,6	8,9	4,4	0,9	5,1
Vivienda	12,8	7,1	5,2	3,7	0,9	3,0
Total (2011)	106,2	49,6	28,3	14,6	3,0	16,7
Chile 1990	39,2	16,5	9,5	8,1	0,7	4,6
OCDE	66,3	41,0	30,2	22,3	12,8	25,8

Elaboración propia a partir de la encuesta Casen 2011; la información de 1990 para Chile proviene de Bravo, Contreras y Millán (2002) y los datos de la OCDE proceden de OCDE (2011).

En este contexto, no parece positivo que el Estado chileno se prive de tener un rol más decidido en materia distributiva. Existe un gran acervo de experiencia acumulada en otros países en materia de buenas y malas políticas públicas, que puede servir de guía en esta empresa. Entre las áreas de intervención posibles, probablemente lo más urgente sea diseñar un sistema de seguridad social considerablemente más efectivo en materia de pensiones y de salud, que entregue un piso de seguridades a la población en estas dos áreas esenciales del bienestar. Es una demanda generalizada y el país cuenta con los recursos y las capacidades para profundizar los cambios de las últimas décadas.

Por otra parte, el impuesto a la renta es la principal herramienta de que disponen los países para distribuir los excedentes de la producción. La reforma tributaria de 2014 representa un cambio significativo en este ámbito, pero está en duda su efectividad y su mantención en el futuro.

Cuarto, concentración del poder político y sobrerrepresentación de los grupos de mayores ingresos en los espacios de toma de decisiones

En contextos de gran desigualdad socioeconómica la democracia es el sistema que mejor garantiza que quienes son sujetos de injusticias puedan reclamar, movilizarse y elegir representantes que defiendan sus intereses y derechos. Pero la sobrerrepresentación de los grupos

de alto estatus en los espacios de toma de decisiones hace que el resto de la ciudadanía considere a la dirigencia política –y, en último término, la propia democracia– con percepciones de lejanía y clausura.

Más allá del legítimo ejercicio de sus derechos de expresión y asociación, los grupos de mayores recursos pueden ejercer influencia directa o indirecta sobre la toma de decisiones políticas mediante la propiedad, el control o un acceso privilegiado a los medios de comunicación y el financiamiento de centros de pensamiento afín y de la actividad política propiamente tal. Así inciden en la agenda pública, apoyan posiciones o financian candidatos afines, lo que podría producir una “desigualdad política”, una influencia diferenciada sobre las decisiones que toman los cuerpos políticos.

En efecto, en Chile el financiamiento de la actividad política ha sido una de las principales herramientas con que han contado los grupos acomodados para asegurar que sus puntos de vista se tomen en cuenta en los procesos políticos. El sistema de financiamiento que funcionó hasta la reforma del año 2016 permitía aportes reservados y aportes anónimos, de personas naturales o jurídicas, a campañas de candidatos particulares. Datos del Servicio Electoral muestran que, en la elección parlamentaria de 2013, el total de aportes reservados y anónimos a candidatos a senador representó casi el 58% del total de aportes. En cuanto a los diputados, representaron el 46% del total. En promedio los candidatos que lograron llegar al parlamento recibieron 2,5 veces más aportes reservados y anónimos que quienes no obtuvieron un escaño.

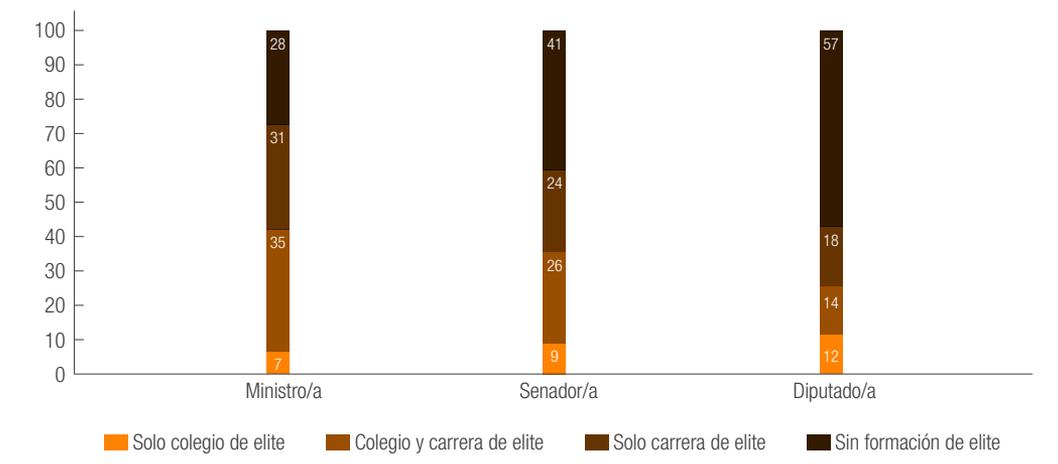
Por sobre los aportes realizados por individuos y empresas a través de estos mecanismos de financiamiento –institucionales, aunque poco transparentes–, durante los últimos años se ha conocido una serie de casos, varios de ellos judicializados, que han venido a mostrar que en Chile ha existido durante muchos años un circuito de financiamiento de la política que operaba por fuera de la legalidad; “una cultura de financiamiento irregular, y a veces ilegal, de la política” (Comisión Engel, 2015: 25).

El financiamiento de campañas facilita que las desigualdades socioeconómicas se traduzcan en diferencias de representación de los grupos sociales en los espacios de decisión. Con datos de la trayectoria escolar y universitaria de parlamentarios y ministros se puede ilustrar las marcadas diferencias entre su composición socioeconómica y la de la ciudadanía a la que deben representar. Cerca del 75% de los ministros, el 60% de los senadores y más del 40% de los diputados del período 1990-2016 asistió a colegios de elite, estudió carreras universitarias de elite, o ambas cosas.

La sobrerrepresentación de los grupos altos en los espacios de toma de decisiones políticas tiene evidentes problemas de legitimidad, pues transmite muy claramente un sentido de desigualdad en la influencia que los grupos más privilegiados pueden ejercer. Más allá de

eventos puntuales que puedan haber minado la confianza de las personas en las instituciones políticas durante los últimos años, lo cierto es que para muchos chilenos y chilenas la toma de decisiones política aparece hoy como “un espejo roto en el cual la nación no puede reconocer su propia imagen”.

Estudios de elite de los tomadores de decisión en Chile, 1990-2016



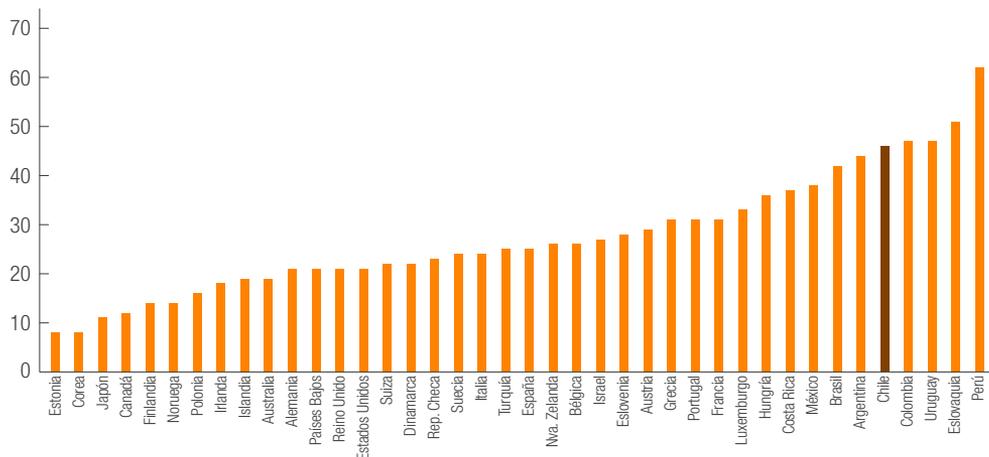
Elaboración propia.

Cambios recientes a la legislación —que contribuirían a aislar la esfera política de los efectos de las desigualdades socioeconómicas— parecen indicar un movimiento hacia un diseño de la institucionalidad política que podría inducir correlaciones de fuerza relativamente más igualitarias que las actuales. Hoy se percibe un fuerte rechazo a la influencia que empresas y sectores de altos ingresos ejercen sobre la representación y las decisiones políticas a través de canales legales e ilegales.

Quinto, un sistema educativo cuya estructura altamente segmentada no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades

Un conjunto importante de las políticas de los últimos veinticinco años ha tenido por objetivo fortalecer la inclusión social en el sistema educacional chileno. Y si bien Chile aparece a la cabeza de la región en logro educacional, esta posición esconde una amplia desigualdad: al medir la brecha entre el 20% superior y el 20% inferior de ingresos en términos de competencias de lectura, Chile ocupa el lugar quinto en la región después de Costa Rica, México, Brasil y Argentina, y el lugar 33 de 34 entre los países de la OCDE. Estas diferencias, que luego se transmiten a la educación terciaria y que tienen impacto sobre el desempeño futuro en el mercado laboral, están fuertemente relacionadas con la marcada estratificación del sistema educacional primario y secundario.

Diferencia entre quintiles 5 y 1 en porcentaje de alumnos con competencias de lectura



Elaboración propia a partir de datos prueba PISA 2012.

Por otro lado, se observa que más de la mitad de los estudiantes secundarios de los estratos bajo y medio bajo egresados en 2005 accedió a estudios de nivel terciario. Todos ellos son alumnos de “primera generación”, los primeros de sus familias nucleares en acceder a estudios superiores. No obstante, la mayoría estudia en instituciones de escasa calidad, a lo que se suma que tienen elevadas tasas de deserción: un tercio del estrato bajo y una cuarta parte del estrato medio bajo no finaliza sus estudios.

La relación entre estrato socioeconómico y trayectoria estudiantil es la síntesis de un conjunto amplio y complejo de procesos y mecanismos a través de los cuales la condición socioeconómica del hogar influye sobre los resultados educativos. Todos ellos importan para alcanzar mayor movilidad social, pero la estructura organizativa y de financiamiento del sistema educacional vigente en las últimas décadas ha operado en la dirección contraria, como un canal de transmisión del nivel socioeconómico entre padres e hijos.

A futuro, un factor crítico para las expectativas de movilidad social es el destino laboral del más de un millón de jóvenes que hoy cursan la educación superior. El volumen de estudiantes ha crecido a tasas mucho mayores que la economía chilena en los últimos diez o quince años, y es probable que la cobertura de educación superior esté próxima a tocar techo en términos de los empleos que el país puede proveer a los egresados. Hay un riesgo importante de que ello no ocurra para todos, y en todo caso no hay un país en el mundo que aspire a que toda su población tenga estudios superiores. Un desafío pendiente es, entonces, proveer a la enseñanza secundaria de los medios y estrategias que doten de competencias a los jóvenes que no ingresarán a la educación superior, así como la instalación de una oferta de educación continua que permita la renovación de conocimientos y competencias a lo largo de la vida.

Sexto, la consolidación de una serie de principios normativos que en algunos dominios justifican las desigualdades existentes y socavan las dinámicas de integración social, mientras que en otros demandan mayor igualdad

El proceso de crecimiento económico y las modificaciones al sistema económico y de provisión de servicios públicos desde inicios de la década de los ochenta, junto con la democratización y apertura social, han producido un nuevo énfasis meritocrático en la sociedad chilena. Si bien un aspecto del discurso meritocrático (“el esfuerzo personal lo es todo para salir adelante”) apunta a una crítica a las posiciones más altas (al poder que se hereda sin esfuerzo o del cual se abusa), también alimenta una serie de estigmatizaciones hacia los grupos más bajos de la sociedad, mediante la asociación entre pobreza y falta de iniciativa. Este último principio, que responsabiliza y estigmatiza a aquellos que “no surgieron”, fomenta estereotipos e invisibiliza las causas estructurales de la desigualdad. Estas y otras estigmatizaciones entre grupos socioeconómicos se reflejan y refuerzan en las interacciones cotidianas y las formas de trato entre personas de distintas clases.

También el valor que se atribuye a la educación, sin desconocer su importancia para la movilidad de los hogares y las competencias individuales, puede funcionar como un mecanismo cultural que lleve a no reconocer o minimizar otros principios de justicia, como puede ser el foco en las necesidades de las personas más allá de sus méritos. El predominio de un ideal de meritocracia de carácter fuertemente individualista puede socavar los principios de solidaridad e integración social, que sientan las bases de las sociedades más igualitarias.

Por otra parte, en Chile se alude crecientemente al respeto y la dignidad como marco de referencia para evaluar las relaciones sociales. Las personas quieren ser bien atendidas en los servicios públicos, no aceptan ser pasadas a llevar en la calle o el transporte, demandan recibir un trato digno en sus trabajos. Más aun, no quieren ser miradas en menos por la posición social que ocupan: es a la luz de los buenos o malos tratos recibidos que muchas de las desigualdades estructurales, más difíciles de abarcar, se someten a evaluación. De igual modo, a la luz de las desigualdades en educación y salud, se demanda un Estado más presente y garante, que dé mayor seguridad en un contexto en que la propia posición y las ganancias obtenidas a lo largo de años de esfuerzo se perciben precarias.

Finalmente, las personas declaran que lo que ganan no refleja el esfuerzo que realizan en su trabajo, y perciben que el salario no cubre las necesidades reales de sus familias. Hay entonces un principio de necesidad que subyace a una crítica sobre los salarios y las pensiones. Dignidad, seguridad, necesidad son orientaciones normativas que catalizan demandas por una mayor justicia social. Todos estos elementos culturales pueden ser, cuando se generalizan, un potente catalizador de cambios sociales, tal como han atestiguado muchos de los movimientos sociales surgidos durante la última década en Chile. Está por verse hasta qué punto estas fuerzas lograrán desatar los nudos sintetizados aquí, aliviando la pesada herencia de la desigualdad socioeconómica en Chile.

